TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Ref: Exp. 25290-31-10-001-2020-00340-01.

Pasa a decidirse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto de 24 de noviembre del año anterior proferido por el juzgado de familia de Fusagasugá, mediante el cual denegó la solicitud de nulidad que por pérdida de competencia formuló dicho extremo procesal dentro del proceso verbal promovido por Luis Eduardo Arias Gómez contra Mónica y Osiris Moya Moreno, en calidad de herederas determinadas de Luis Eduardo Moya, y herederos indeterminados del citado causante, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

La demanda, que fue presentada el 30 de noviembre de 2020, pidió anular y cancelar el registro civil de nacimiento del demandante, sentado en la notaría 22 de Bogotá, donde fue reconocido como hijo por su padre de crianza Ezequiel Arias López, para que, en su lugar, se mantenga el registro que fue sentado en principio por su padre biológico, Luis Eduardo Arias Gómez.

Admitida a trámite por auto de 3 de febrero de 2021, se ordenó la notificación de los herederos indeterminados, a los que, previo emplazamiento, se les designó curador ad-litem; así, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial, y el 18 de agosto de 2021, fecha en que se llevaría a cabo, advirtió el juzgado que en el auto

admisorio no se incluyeron a las herederas determinadas del causante, por lo que, habiendo concurrido a la audiencia Osiris Moya Moreno, la tuvo por notificada por conducta concluyente, al paso que ordenó la notificación de la otra demandada.

Llevados a cabo los trámites de notificación, se celebró la audiencia inicial el 11 de julio de 2022, en la que se señaló como fecha y hora para efectuar la audiencia de instrucción y juzgamiento el 22 de septiembre siguiente; mas como la demandada Mónica Moya Moreno pidió declarar la nulidad de lo actuado por indebida notificación, previo traslado de la petición, se convocó a audiencia con el fin de desatar esa solicitud; instalada ésta solicitó la demandada Osiris declarar la pérdida de competencia y la nulidad de las actuaciones surtidas en el proceso, aduciendo que al haber transcurrido más de un año contado desde la presentación de la demandada sin que se haya dictado sentencia, ésta es la consecuencia que de esto se desprende según lo prevé el artículo 121 del código general del proceso, petición a la que adhirió la otra demandada.

Mediante el proveído apelado, el a-quo declaró que no podía declarar la pérdida de competencia, porque el término se cuenta a partir de la notificación de la parte demandada y falta precisamente por definir lo relativo a la validez de la notificación que se le hizo a Mónica; en todo caso, no existe mora del juzgado, sino actuaciones dilatorias por parte de los apoderados, tales como la solicitud de nulidad por indebida notificación, a la que por obligación debe dársele trámite.

La determinación fue recurrida en apelación por las demandadas, en recurso que les fue concedido en el efecto devolutivo el cual, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II.- El recurso de apelación

Se despliega sobre la idea de que la norma que es de orden procesal es clara en establecer un término razonable para que el juez dicte sentencia, so pena de que si no lo hace, el proceso deba ser asumido por otro funcionario judicial, término que corre de forma objetiva desde la notificación del auto admisorio de la demanda; no puede decirse que exista dilación de su parte, cuando contestó oportunamente la demanda y no ha solicitado ningún aplazamiento de las audiencias las que, por el contrario, han sido dispuestas por el mismo juzgado, tanto que a pesar de que la nulidad por indebida notificación la formuló la otra demandada en septiembre de 2022, transcurrieron más de catorce meses sin ser desatada, demora que no es atribuible a las partes.

Consideraciones

Atinente al motivo de nulidad invocado, ha de recordarse que al tenor del artículo 121 del estatuto general del proceso, “[s]alvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada”, pues “[v]encido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses” y que “[e]xcepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso”.

Mas, aun cuando con base en dicho texto la doctrina jurisprudencial venía sosteniendo que “este tipo de nulidad, al operar de «pleno derecho», surte efectos sin

necesidad de reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o saneamiento” (Cas. Civ. Sent. de 11 de julio de 2018, STC8849-2018), es bien sabido que, no hace mucho rato, la jurisprudencia constitucional descartó que esa nulidad operara en esos términos, vale decir, ‘de pleno derecho’, al punto que por ello retiró del ordenamiento jurídico la expresión que traía el predicho artículo, por considerarla incompatible con el orden constitucional, condicionando la exequibilidad del resto de la norma en lo que hace a este aspecto, sobre la base de que si aquella no obra por sí, esto es, no es autónoma ni automática, entonces es claro que *“debe ser alegada antes de proferirse la sentencia”*, como que se trata de una de aquellas nulidades susceptibles de saneamiento, *“en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del código general del proceso”* (Sentencia C-443 de 2019).

Así, se ha dicho que la *“actuación extemporánea del funcionario judicial no podrá ser convalidada y, por tanto, dará lugar a la pérdida de competencia, cuando en el caso concreto se verifique la concurrencia de los siguientes supuestos:*

(i) *Que la pérdida de competencia se alegue por cualquiera de las partes antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda instancia.*

(ii) *Que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado por causa legal de interrupción o suspensión del proceso.*

(iii) *Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del trámite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del artículo 121 del CGP.*

(iv) *Que la conducta de las partes no evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial durante el trámite de la instancia*

correspondiente, que hayan incidido en el término de duración del proceso.

(v) Que la sentencia de primera o de segunda instancia, según corresponda, no se haya proferido en un plazo razonable” (Sent. T-341 de 2018).

Aquí, la petición de nulidad fue hecha sobre la base de que a la fecha en que fue pedida ya se había vencido con amplitud el término previsto en la citada norma, el que empieza a contarse desde la presentación de la demanda, argumento inicial en el que no podría convenirse. Ciertamente, la regla que obra para el caso no es la del artículo 90 del citado ordenamiento, pues lo que establece dicha previsión es que “[e]n todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda”, para después agregar que “[s]i vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo 121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda”, lo cual significa, aplicada la situación al caso, que si la demanda fue admitida a trámite antes de que transcurrieran esos treinta días a que alude el precepto, esa regla no obra en el caso, como sí la del 121, en cuanto dispone que el año en cuestión empieza a contar una vez se logre la intimación de todos los demandados.

Ahora bien. En efecto, la nulidad se alegó por el extremo demandado antes de dictarse sentencia, no ha existido prorroga de la competencia por parte del juzgado, no se advierte un proceder dilatorio de las partes, desde que lo único que vino de una de ellas fue una solicitud de nulidad, y aunque en sus albores el proceso transitaba con normalidad, luego de que se dispuso convocar al proceso a las herederas determinadas del causante Luis Eduardo Moya no ha mostrado genuino avance, lo que en principio permitiría

sostener que concurren los requisitos para acceder a la solicitud de las convocadas.

A pesar de ello, nótese que si para el momento en que se solicitó esa pérdida de competencia estaba pendiente por definirse la nulidad invocada por una de las demandadas alegando que fue indebidamente notificada de la existencia del proceso, no hay fundamento para decir que para ese momento en que advino la sobredicha petición concurrían los requisitos para ello, aspecto que de todas formas debe analizarse atendiendo al cariz restrictivo que esa labor encarna cuando de normas sancionatorias se trata.

Por supuesto que, bajo esa perspectiva, debe convenirse en que de momento ya habiéndose zanjado el tema de la nulidad y estando dadas las condiciones para que el proceso pueda finalmente retomar ese rumbo que traía, al punto que ya se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento, lo que más armoniza con el derecho que tienen las partes a acceder a una justicia sin dilaciones, es velar por su supervivencia, algo en lo que juegan indudablemente los principios que inspiran las nulidades, entre los que se distingue en forma prominente el de conservación, según el cual debe prevalecer la supervivencia del acto procesal, en vez de la destrucción, y el de economía, pues la nulidad, estas alturas, implicaría *“la apertura de nuevos debates autónomos, diferentes a la controversia de base que le dio origen, que posponen la conclusión del litigio por el cual se acude al sistema judicial”* (sentencia citada).

Lo dicho basta para la confirmación de la decisión apelada; la condena en costas, ya para terminar, se hará con sujeción a la regla 1ª del precepto 365 del ordenamiento en cita.

III. – Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto de fecha y procedencia preanotados.

Costas a cargo de la parte recurrente. Tásense por secretaría del a-quo en el momento procesal oportuno e inclúyase la suma de \$250.000 como agencias en derecho de esta instancia.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 004 Civil Familia

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c9f65fbb71dc4180436b55e594ca0887d95b80c43eb9ceade3d7e684336d4d9c**

Documento generado en 22/03/2024 10:15:27 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>